

EL 'CASO GAL'

CiU emplaza a González a convencer a los ciudadanos

El jefe del Gobierno supera el pleno sobre los GAL, pero aún no tiene amarrado el calendario electoral

LUIS R. AIZPEOLEA / ANABEL DÍEZ. Madrid Felipe González superó ayer, con el apoyo de CiU, el reto de replicar en el Congreso a las graves imputaciones de su ex correligionario Ricardo García Damborenea, pero sigue sumido en el atoladero.

Arropado con un buen discurso, el presidente del Ejecutivo garantizó que "detrás de los GAL nunca estuvo el Gobierno" que él preside y advirtió que los jueces dirán la última palabra, como en el informe Crillon y la captura de Luis Roldán. No

quiso o no pudo dar su versión sobre cómo se crearon y financiaron los Grupos Antiterroristas de Liberación, autores de al menos 22 asesinatos. Se limitó a proclamar su inocencia y a dejar en evidencia a su acusador. El portavoz de los naciona-

listas catalanes, Joaquim Molins, optó por darle crédito, aunque le planteó un futuro difícil. González deberá convencer a los ciudadanos, y si no lo consigue, disolver el Parlamento. El plazo se agotará a mediados de septiembre.

Felipe González sobrevivió ayer al debate parlamentario sobre los GAL. Una vez más tuvo que oír de sus adversarios duras acusaciones y la renovada petición de que desaloje La Moncloa cuanto antes. Pero superó el reto de responder a García Damborenea, que le había acusado ante el juez y en rueda de prensa de haber permitido la erección de los Grupos Antiterroristas de Liberación, y evitó con ello la convocatoria inmediata de elecciones generales. La justicia, ante la que está dispuesto a comparecer, dirá la última palabra, advirtió.

Gracias al apoyo explícito de CiU —"ha hecho usted un buen discurso", le dijo Molins—, el presidente del Gobierno podrá mantener, al menos por ahora, su calendario político, que pasa por convocar elecciones en marzo de 1996. La garantía, sin embargo, no es plena. Molins matizó que si González no consigue recuperar su crédito ante la opinión pública es mejor que disuelva las Cortes.

Medios próximos al propio líder de CiU, Jordi Pujol, se encargaron de confirmar este mensaje horas más tarde desde Barcelona, informa Luis Mauri. Del debate de ayer el presidente de la Generalitat sacó la impresión, según estos medios, de que a González le quedan ánimos para recuperar su prestigio en las próximas semanas. CiU juzgará si lo consigue o no en base a las informaciones y opiniones de la prensa.

Pujol espera que el presidente del Gobierno se prodigue de inmediato en entrevistas en televisión y en declaraciones periódicas en general. "El presidente del Gobierno debe esforzarse en repetir una y mil veces en público lo que dijo ayer en el Congreso", apuntó un dirigente nacionalista, que precisó que Pujol tiene de plazo hasta mediados de septiembre para decidir si cumple el calendario electoral acordado con González (autonómicas catalanas en otoño y legislativas en primavera) o si provoca su inversión.

Reproche de Anasagasti

A la victoria parlamentaria de González contribuyó que casi ningún partido dio crédito a las imputaciones de Damborenea. Nadie dio la cara por el ex secretario general de los socialistas vascos, hoy próximo al Partido Popular. Aun así, la mayoría de la oposición, —PP, IU, PNV y Grupo Mixto— salió insatisfecha de la sesión porque Felipe González, alegaron, no ofreció una explicación sobre el montaje de los GAL.

José María Aznar y Julio Anguita le exigieron responsabilidad política por la guerra sucia contra ETA y la inmediata disolución de las Cortes. No hubo, por tanto, novedades. Si acaso, la firme actitud del portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, que culpó a González de omisión por no abrir una investigación interna



Joaquim Molins, en el centro, conversa con diputados de su formación durante el debate parlamentario.

LUIS MAGAN

Un diálogo de sordos más que un debate

L. R. A. Madrid Más que un debate, el de ayer fue una toma de posición de los partidos ante un fenómeno lejano en el tiempo y de enorme gravedad política, como fue el de los GAL. Aznar y Anguita intentaron que el jefe del Gobierno entrara en el terreno de lo concreto, en el del montaje de la banda terrorista que funcionó de diciembre de 1983 a junio de 1987. No lo consiguieron.

González se movió en el ámbito de las actitudes de su Gobierno, y de él personalmente,

mientras funcionó aquel fenómeno terrorista. Y presentó pruebas de la clara actitud condenatoria que mantuvo, pero sin contestar a la interrogante que le formuló el portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, acerca de por qué no abrió una investigación interna cuando empezaron a aparecer indicios de que había policías involucrados en los GAL. A juicio de González son los tribunales quienes deben aclarar esos hechos. No se ha movido un ápice de esta postura, que alimenta la hipóte-

sis de la responsabilidad por omisión.

Pero la oposición tampoco quiso entrar al trapo del debate que González abrió y que también es de enorme gravedad y actualidad: el riesgo de que el ritmo y los calendarios de la política lo fijen desde fuera de las instituciones democráticas gentes con poder económico suficiente como para chantajear a políticos y ciudadanos a través del comercio de los dossiers. O el de las imputaciones de delitos graves a personajes públicos que, al cabo del

tiempo, los tribunales determinan su invalidez, pero cuando ya se ha arruinado la carrera de la víctima y el prestigio de las siglas que representaba.

González ha querido introducir reiteradamente a Aznar en este debate en la medida que es su más probable sucesor al frente del Gobierno y puede ser víctima, él o su partido, como representantes democráticos, del mismo fenómeno, pero no lo ha conseguido. El de ayer fue un nuevo intento fallido. Como también lo fue

el de sensibilizar a los partidos sobre las consecuencias tan graves que el ruido de los GAL está teniendo en la movilización popular en Euzkadi contra el terrorismo de ETA que es el que hoy sobrevive.

La aclaración del montaje de los GAL, recibida positivamente por todas las instancias democráticas, sería aún mejor si no estuviera adobada de las dosis de instrumentalización y publicidad obscena que ofrecen personajes como Ricardo García Damborenea.

en el Ministerio del Interior ante los crímenes de los GAL.

González prácticamente se limitó a responder a las imputaciones de Damborenea. Puso el acento en enviar un mensaje de serenidad a la opinión pública extendiéndose en la defensa de los principios del Estado de derecho y de la conducta mantenida por su Ejecutivo durante la etapa de los GAL, de rechazo —indicio— a la banda terrorista. Los partidos de la oposición, con la excepción de CiU, no entraron en este terreno, con lo que el debate se convirtió en un diálogo

de sordos, aunque sin la virulencia de ocasiones anteriores.

El jefe de Gobierno negó haber discutido con Damborenea una estrategia de la guerra sucia contra ETA. Ofreció datos. Sólo se reunió cuatro veces con quien ahora le acusa gravemente: una, con toda la Ejecutiva del PSE, a raíz del asesinato de Enrique Casas; otra, acompañado de Txiki Benegas y Ramón Jáuregui, en la que prepararon una entrevista que González tenía prevista, al día siguiente, con el lehendakari Garaiakotxe: una tercera, en la que Damborenea acompañó a la

hija de Indalecio Prieto, y la cuarta, en solitario con Damborenea, de media hora de duración, en la que no se habló de terrorismo.

También negó la imputación de Damborenea de que la estrategia de los GAL la adoptó el Gobierno para forzar la cooperación francesa en la lucha contra el terrorismo. González aseguró que Francia cambió radicalmente su conducta a raíz de una larga entrevista que mantuvo con su presidente, Francois Mitterrand, en diciembre de 1983. Ofreció a continuación datos

que prueban, en su criterio, que si condenó la actuación los GAL desde el mismo momento que comenzaron a atacar, en diciembre de 1983. Aseguró que ese mes se produjo su primer pronunciamiento condenatorio y, tras enumerar las cuantiosas veces que reprobó los atentados de este grupo, recordó que en marzo de 1984, cuando cayeron detenidos activistas de esta banda en territorio español, garantizó que las instituciones los condenarían a muchos años. "Detrás de los GAL nunca estuvo el Gobierno que presido", proclamó.